

Las fosas comunes son una herida abierta en Perú

ROBERTO CORTIJO /

LIMA

El descubrimiento de fosas comunes en zonas andinas y en la selva en los últimos ocho meses, con osamentas de víctimas de la guerra que asoló a Perú, se ha convertido en una herida abierta en el país, según el reclamo de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Los últimos hallazgos se produjeron en enero en la región surandina del país y en septiembre del año pasado en la región amazónica, donde se encontraron cuerpos con signos de tortura y de ejecuciones extrajudiciales.

“En la década del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori no se investigó apariciones de fosas comunes porque no había condiciones políticas para hacerlo. Además, el Ministerio Público, encargado de las investigaciones, no era independiente y la policía no intervenía”, indicó Francisco Soberón, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Otro elemento que impedía las investigaciones fue que las fosas halladas estaban en zonas militarizadas declaradas en emergencia, es decir donde las fuerzas armadas tenían el poder político-militar y rechazaban la presencia de organismos de derechos humanos, añadió.

Se ignora la cantidad de fosas existentes en Perú, pero los organismos de derechos humanos consultados consideran que la mayoría se encuentra en Ayacucho, Huancavelica y Junín, regiones andinas que fueron centros de la guerra interna, donde sus habitantes estuvieron entre dos fuegos, por un lado Sendero Luminoso (de corte maoísta) y por el otro, las fuerzas armadas.

La Defensoría del Pueblo está investigando el descubrimiento de dos fosas comunes en la ciudad de Tarapoto, en septiembre pasado, donde tuvo presencia el otro grupo alzado, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA, guevarista). En esa zona las tribus indígenas quedaron en medio de la lucha entre las fuerzas armadas y el MRTA y luego Sendero Luminoso.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo entre 1980 y 1996 se ha comprobado la desaparición forzada de 7,382 personas y 514 ejecuciones extrajudiciales que merecen ser investigadas por el ministerio Público y por el Congreso.

La mayor cantidad de masacres --según Aprodeh-- se registraron en el gobierno de Alan García (1985-1990), unas siete. Los casos más sonados fueron los de Accomarca, comunidad campesina de Ayacucho donde el ejército dio muerte a 69 campesinos, los sucesos de los penales en Lima (18 y 19 de junio de 1986)

donde cerca de 300 presos por terrorismo fueron asesinados cuando ya habían depuesto un motín.

Le sigue el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000). En los primeros seis años se registraron cinco casos. La más conocida fue la masacre de Barrios Altos, en 1991, una zona pobre de Lima, donde el grupo paramilitar Colina asesino a 15 personas y a un niño.

El 18 de julio de 1992, el mismo grupo ingresó a la Universidad estatal La Cantuta y secuestró a ocho estudiantes y a un profesor, quienes tras ser torturados fueron asesinados.

En enero, el fiscal Jorge Cusinga Luján reveló el hallazgo de cuatro fosas en el distrito de Colcabamba, al este del Departamento de Huancavelica (440 kilómetros al sureste de Lima), con al menos 17 cadáveres que datan de ocho a 10 años.

Cusinga Luján basó su declaración en informes de peritos del laboratorio central de la Dirección Nacional Criminalística (Dinincri) de la Policía Nacional, que determinaron que al menos ``dos de las víctimas tienen orificio de entrada y salida de bala" y otra evidencia ``fractura a nivel del cuello antes de la muerte".

En ese mismo mes, se halló una fosa en el distrito de Pachamarca, Departamento de Huancavelica con restos de ocho peruanos asesinadas en 1989.